



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

AUDIENCIA

Medellín, octubre 20 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-021-2021-00416-02
Demandantes: DORA MARÍA JIMÉNEZ PAMPLONAMARÍA SUSANA
CASTILLEJO PADILLA
Demandado: AFP PROTECCIÓN SA
Asunto: APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE LIBRA
MANDAMIENTO DE PAGO

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir la providencia dentro del proceso ejecutivo de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Se adelanta el trámite ejecutivo a efectos de obtener el pago de las condenas emitidas dentro del proceso ordinario de radicado N° 05001-31-05-021-2010-00024 que dispuso en favor de ambas ejecutantes el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a partir del 8 de septiembre de 2008, al igual que los intereses de mora desde el 11 de mayo de 2010; señalando la activa que existe un saldo insoluto por ambos conceptos y en favor de cada accionante (archivo N° 2)

En providencia del 26 de abril de 2022 se libró mandamiento de pago, el que se consignó de forma abierta así:

PRIMERO: librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral en favor de DORA MARÍA JIMÉNEZ PAMPLONA y MARÍA SUSANA CASTILLEJO PADILLA y en contra de PROTECCIÓN SA por los siguientes conceptos:

- 1) Diferencia del retroactivo pensional pagado por Protección SA y el reconocido en la sentencia del proceso ordinario en favor de cada una de las demandantes.*
- 2) Mayor valor de los intereses moratorios.*
- 3) Costas del proceso ejecutivo.*

(archivo N° 3)

Decisión frente a la cual la activa presentó los recursos de reposición y de apelación reprochando de la providencia un error en la transcripción de las sumas por las que se adelanta la ejecución en favor de Susana Castillejo (en la parte motiva del auto), y mostrando inconformidad con la forma en que se dio la orden de pago en tanto tal manifestación genérica no contiene los extremos en que se generó la obligación, su descripción (ora como retroactivo pensional, ora como intereses de mora) como tampoco la cuantificación de la deuda, por lo que pide se ajuste la decisión bajo estos parámetros (archivo N° 4).

Fueron resueltas las objeciones inicialmente en auto del 15 de junio de 2022 (archivo N° 5) indicando que el recurso de reposición fue interpuesto de forma extemporánea empero de forma oficiosa aclaró el mandamiento de pago, especificando los conceptos, extremos y valores ejecutados en favor de María Susana Castillejo, sin hacer referencia alguna a las obligaciones en favor de Dora María Jiménez.

Agotado el recurso de queja mediante el cual se declaró mal denegado el recurso de apelación procede esta corporación a pronunciarse sobre los reparos de la activa que se centra en solicitar la reconsideración de la providencia que da inicio al trámite de ejecución toda vez que la parte motiva hace una narración incorrecta

de las sumas pretendidas, y reprocha de la parte resolutive la falta de consagración de los valores que la parte tacha como insolutos

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 no se recibió escrito alguno.

CONSIDERACIONES

Corresponde a esta corporación resolver los reparos que se elevan contra el auto de mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, aspecto que de cara al numeral 8 del artículo 65 del CPTSS es susceptible del recurso de alzada.

Ahora bien, se encuentra por fuera de discusión que: **1)** La condena que da lugar a esta ejecución se generó dentro del proceso de radicado 021-2010-00024 que condenó a Protección a reconocer la pensión de sobrevivientes causada por el afiliado FRANKLIN ENRIQUE CASTILLEJO PADILLA, prestación generada desde el 8 de septiembre de 2008 en favor de DORA MARÍA JIMÉNEZ PAMPLONA como cónyuge y para MARÍA SUSANA CASTILLEJO JIMÉNEZ en calidad de hija, compartiendo la prestación en proporción del 50% para cada una. De igual forma se ordenó el reconocimiento de intereses de mora a partir del 11 de mayo de 2010 hasta la satisfacción de las condenas. **2)** Que la activa aduce que Protección pagó de forma deficitaria todos los conceptos, realizando descuentos a la mesada pensional y con pagos inferiores en lo atinente a los intereses de mora, Expuso los valores que conforme a sus cálculos, se adeudan; **3)** que el auto que libró mandamiento de pago emitido el 26 de abril de 2022 en su parte resolutive emite una orden genérica, referente a la obligación de la AFP Protección de pagar a Dora María Jiménez y María Susana Castillejo Padilla la diferencia en el retroactivo pensional y los intereses de mora (archivo N° 3)

También se verifica que el despacho de origen emitió dos correcciones al mandamiento de pago, así:

En auto del 15 de junio de 2022, aclaró la parte resolutive de la decisión especificando los montos adeudados a María Susana Castillejo Padilla por retroactivo pensional, con sus extremos y en lo atinente a los intereses de mora, mantuvo la orden genérica por aquello que se demuestre como insoluto respecto al retroactivo corrido entre el 1° de agosto de 2015 y el 28 de febrero de 2021. En esta providencia nada se dijo respecto a la ejecución en favor de Dora María Jiménez (archivo N° 5)

Luego con auto del 21 de julio de 2022 el despacho de forma oficiosa aclaró el mandamiento de pago, sin incluir una suma específica, pero si estableciendo los parámetros de cuantificación de la deuda en favor de ambas accionantes así:

- 1. Los saldos pendientes del retroactivo de la pensión de sobrevivencia que fue reconocida a las demandantes en el proceso ordinario laboral radicado 0500131-05-0212010-00024-00 del Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín, luego de descontar las sumas pagadas por la ejecutada.*
- 2. Los saldos pendientes por concepto de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993 reconocidos a las demandantes en el proceso ordinario laboral radicado 0500131-05-0212010-00024-00 del Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín, luego de descontar las sumas pagadas por la ejecutada*

(Archivo N° 8)

Aun inconforme con la técnica utilizada por el despacho, la parte actora insistió en los reparos que propuso como recurso de apelación (archivo N° 9)

Así las cosas, la competencia de esta corporación se centra en establecer si para efectos de librar mandamiento de pago es necesario establecer unas sumas

precisas de ejecución o esta puede realizarse a través de parámetros que permitan su cuantificación.

Pues bien, al respecto resulta necesario detenerse en las premisas legales que ilustran este caso, a saber; el artículo 100 del CPTSS y del artículo 422 del Código General del Proceso.

El artículo 100 del CPTSS refiere que es exigible a través del trámite ejecutivo *“toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”* a su turno, el artículo 422 del CGP indica como presupuestos de la acción ejecutiva, la existencia de “obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él...”

Descripción que revela los elementos mínimos que debe contener aquel documento o acto que se pretenda para cumplimiento a través del proceso ejecutivo laboral y que se sintetizan en tres aspectos primordiales a saber: 1) una obligación expresa, 2) clara y 3) actualmente exigible.

Se trata de requisitos que han de reunirse de forma conjunta y suficiente y a través de los cuales se decantan aquellos reclamos donde no se discute la existencia de una obligación, tampoco está en duda los sujetos obligado (s) y beneficiario (s), se tiene certeza del monto adeudado y/o obligación debida, así como la fecha de exigibilidad. Reclamación donde es inane la discusión sobre la configuración de la obligación, pues tales elementos se establecieron con suficiencia en un documento que se presenta como base de recaudo.

Con estas premisas encuentra esta corporación que la técnica utilizada por el fallador de instancia se adecúa aquello que fue ordenado en la sentencia que se presenta para su pago y resulta suficiente para dar inicio al trámite de ejecución,

en tanto las sentencia que se presentan para su ejecución no contienen una suma única a cancelar, pues si bien calcula un retroactivo pensional causado hasta el mes de abril de 2012 deja abierta la condena para aquellas mesadas que se sigan causando en adelante y respecto a los intereses de mora, solo marca el hito inicial, orden que comporta una obligación susceptible de cobro a través de la vía ejecutiva.

Contrario a lo referido por la recurrente, la metodología no restringe los derechos reclamados, ni los excluye, y por el contrario hace expesos los elementos que serán verificados en la etapa respectiva, donde una vez agotadas una eventual excepción de pago, se proceda a la liquidación del crédito y se determine si existe una deuda insoluta por los conceptos reclamados.

Resta por indicar que, pese a los intentos de corrección del mandamiento de pago dentro de sus consideraciones preliminares subsiste disparidad en la narración de los hechos en lo relativo a las sumas que se estiman como insolutas, aspectos que no impide la continuación del trámite, pero para efectos de ajustar el proceso se dispone al despacho de origen su corrección, para que los hechos reflejen aquello que se narra en el escrito de ejecución, sin que ello implique la variación de la orden de pago, la que se indicó resulta suficiente a través de los parámetros de cuantificación de la eventual deuda.

En mérito de lo expuesto, **LA SALA SEXTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA** la providencia recurrida, sin embargo, para efectos de dar claridad al trámite se dispone la corrección del mandamiento de pago en lo atinente a sus antecedentes, para que reflejen los valores que la parte expone como insolutos.

Sin costas en esta instancia

Lo resuelto se notifica a las partes en estados. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia.

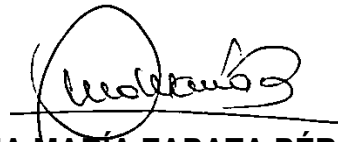
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 24 de octubre de 2022